

---

# EL FUTURO DEL SOCIALISMO: MÁS ALLÁ DEL ESTADO ASISTENCIAL

Luciano Pellicani

---

*análisis y debate*

---



2

Un politólogo liberal, Bertrand de Jouvenel, ha observado que el liberalismo del siglo pasado era la teoría y la práctica de emancipación de las clases pudientes. Para aquellos que no tenían ni propiedad ni capacidades individuales de mercado, las libertades liberales estaban vacías de contenido.

Los socialistas, pues, tenían perfecta razón cuando veían en el liberalismo la ideología de la burguesía. Y tenían razón también cuando, para garantizar a todos los miembros de la comunidad política el disfrute de las libertades concretas, querían que el Estado dejara de ser el guardián de la propiedad privada y asumiese el compromiso de redistribuir la riqueza social. Esta, por lo menos, era la reclamación de Lassalle, de Merlino, del matrimonio Webb, de Bernstein, es decir, de los socialistas reformistas que no creían en las virtudes taumatúrgicas de la revolución violenta y de la economía colectivista, y, sin embargo, se daban cuenta de que el mercado autoregulado era un mecanismo inicuo de distribución de la riqueza, una institución que penalizaba despiadadamente a aquellos que no estaban entrenados para participar con éxito en el juego de la competencia.

Su reclamación, con el tiempo, fue aceptada e incorporada al código normativo de la civilización occidental. Y fue satisfecha concretamente cuando los partidos socialdemócratas europeos, una vez en el poder, utilizaron los instrumentos analíticos y operativos elaborados por Keynes para construir el Estado social. Esto ha traído el fin del *laissez faire* y el inicio del capitalismo planificado. Así, el encuentro entre liberalismo y socialismo, que en el siglo XIX parecía más que imposible, en nuestro siglo se ha realizado a través de un compromiso pragmático. El ala reformista del movimiento obrero europeo ha renunciado a la supresión del mercado —en el que ha reconocido un instrumento insustituible para conseguir la utilización racional de los recursos escasos y para estimular al máximo el crecimiento económico— pero, al mismo tiempo, ha conseguido hacer prevalecer la demanda de redistribuir la riqueza según criterios de justicia social. De tal modo el capitalismo ha sido, al menos parcialmente, socializado, esto es, sometido al control de las estructuras dominantes de la comunidad política. En consecuencia, el crecimiento económico y la distribución de los recursos no han estado sólo regulados exclusivamente por los mecanismos espontáneos del mercado, sino también —y en ciertos casos sobre todo— por las intervenciones del Estado, que se concretaron sustancialmente en los siguientes puntos:

— Expansión progresiva de los servicios públicos, como la escuela, la vivienda, la asistencia médica.

— Introducción de un servicio fiscal basado en el principio de la tasa progresiva.

— Redistribución de la riqueza para garantizar a todos los ciudadanos un ingreso mínimo.

— Concesión de una pensión a los trabajadores ancianos o incapacitados con la que garantizar un ingreso seguro aún después del cese del tiempo de trabajo.

— Introducción de una legislación orgánica del trabajo orientada a tutelar los derechos de los trabajadores y a mitigar su situación de inferioridad en relación con los empresarios.

— Prosecución del pleno empleo con el fin de garantizar a todos los ciudadanos un trabajo y, por tanto, una fuente de ingreso.

En síntesis, y por decirlo con las palabras de Asa Briggs, el Estado asistencial es «un Estado en el cual el poder público es empleado útilmente (a través de la acción política y administrativa) en un esfuerzo orientado a modificar el juego de la fuerza del mercado en, por lo menos, tres direcciones: en primer lugar, garantizando a los individuos y a las familias un ingreso mínimo independientemente del valor de mercado de su trabajo y su propiedad; en segundo lugar, restringiendo el área de inseguridad, colocando a individuos y familias en condición de afrontar determinadas contingencias sociales (por ejemplo, enfermedad, vejez, desocupación); en tercer lugar, asegurando que todos los ciudadanos, sin distinción de clase ni de *status*, gocen de los mejores niveles posibles en relación a una gama predeterminada de servicios sociales».

En esta situación el Estado asistencial puede ser visto, sin más, como la institucionalización de una auténtica «revolución cultural», es decir, de un cambio profundo de las actitudes y de las orientaciones ético-políticas de la opinión pública europea (y no sólo europea). Como tal, eso representa algo de lo que la civilización en que (y de la que) vivimos no puede prescindir sin desnaturalizarse o, cuando menos, sin renegar de aquello que le anima desde decenios: la promesa democrática.

«El *Welfare State* —ha escrito el socialdemócrata Gunnar Myrdal— ha sido un gran éxito y la historia de casi todas las familias es una segura demostración de ello». No es diferente el juicio del liberal Ralf Dahrendorf: «El *Welfare State*, en cierto sentido, es el mayor progreso que la historia ha conocido hasta ahora».

Y, sin embargo, hoy el Estado social está en tela de juicio. Neoliberales y neomarxistas han juzgado que el experimento de planificar la economía de mercado para maximizar la eficacia y la igualdad ha concluido en un desastre; en la mejor de las hipótesis la fórmula ha dado todo aquello que podía dar: ahora está agotada y, además, produce toda una serie de «efectos perversos» que tienden a desequilibrar peligrosamente a las sociedades industriales avanzadas. Entre estos «efectos perversos» se cuentan la inflación, el estancamiento económico y el desarrollo hipertrofiado de la burocracia estatal. No se puede decir que estas acusaciones, aunque se formulen a menudo en tonos apocalípticos, estén privadas de fundamento. Todo lo contrario. Incluso los más denodados defensores del modelo socialdemócrata admiten que algo debe ser revisado en la máquina del Estado asistencial.

La mayor parte de los estudiosos coinciden espontáneamente en un punto: el sistema occidental está atravesando una fase *sui generis*. Paradójicamente, porque ha tenido éxito, el capitalismo planificado corre el riesgo de autodestruirse: elevando el nivel de vida de las masas trabajadoras ha elevado al mismo tiempo el nivel de sus expectativas. Ha nacido así una «sociedad exigente» e «indócil» que periódicamente entra en una fase de «excitación». La «satisfacción litigiosa», con la que Raymond Aron había caracterizado, hace 25 años, a la sociedad opulenta, se está transformando en una «insatisfacción litigiosa». Esto explica por qué las fórmulas a las que se recurre continuamente en los diagnósticos de la «enfermedad», que ha golpeado en los años 70 a Occidente, son «disgregación del orden civil», «descomposición de la disciplina social», «alienación de los ciudadanos», «amotinamiento permanente», «erosión del pacto social», «ausencia de un proyecto unificador», etc. En suma, estamos viviendo una fase de desmoralización análoga a la descrita magistralmente por Ortega y Gasset en la *Rebelión de las masas*. Una vez más los europeos han perdido la confianza en su futuro y parecen desesperar de las posibilidades de construir su propia historia según un proyecto racional.

La variable explicativa fundamental de la crisis en que desde hace años estamos inmersos parece ser el desequilibrio entre las estructuras de *inputs* (demandas) y las estructuras de *outputs* (recursos materiales disponibles para satisfacer las demandas). La revolución de las expectativas crecientes está produciendo todos los efectos de ruptura previstos por Gino Germani. Los recursos, aún aumentando año tras año, no alcanzan jamás el nivel de las demandas. Así, el crecimiento económico se ha convertido en un factor de disgregación social o, si se prefiere la expresión acuñada por Daniel Bell, un «disolvente político». El keynesianismo y el asistencialismo han puesto en marcha un proceso perverso y poco controlable: todo, en efecto, ocurre como si la sociedad opulenta se mordiese la cola en el intento imposible de equilibrar recursos y expectativas.

El mecanismo generador del desequilibrio puede ser descrito así: primero se han puesto «en movimiento» los trabajadores, que han utilizado el instrumento de la huelga para obtener aumentos salariales equivalentes al aumento de la productividad (realizada o realizable). Después, en virtud de un típico «efecto de imitación» que ha operado como un contagio, se han movido los empleados deseosos de restablecer las distancias de ingreso y de *status*. Pero como la productividad de los cuerpos burocráticos no es una variable sino una constante, han surgido esas espirales inflacionarias que son la causa inmediata de las dificultades en que se debaten los gobiernos de las sociedades capitalistas. Se ha institucionalizado así una especie de «carrera de obstáculos» entre las variadas categorías profesionales que constriñen a los gobiernos a expandir la masa monetaria y a aumentar continuamente el gasto público.

El aspecto más preocupante de este juego reivindicativo «descontrolado» es el hecho de que la crisis de eficacia del sistema corre el peligro de transformarse en una crisis de legitimidad, que es —como ha señalado Guillermo Ferrero en aquel extraordinario libro titulado *Poder*— la enfermedad más grave que pueda golpear a un cuerpo político. Amplias categorías profesionales se sienten «maltratadas» y esto erosiona las bases del consenso, desarticula la sociedad y exalta el corporativismo y el individualismo. Por eso los gobiernos no logran hacer una política que proteja los objetivos a largo plazo de la colectividad, y los intereses sectoriales aplastan a los intereses generales.

Todo esto, obviamente, no puede más que llevar al progresivo cuestionamiento del «pacto social» que sostiene a las poliarquías industriales, más aún cuando actualmente la «ecuación keynesiana» —basada en la correspondencia global entre los imperativos del crecimiento económico y las exigencias de una mayor igualdad social— es pasada por alto. Esta no parece ya capaz de garantizar la plena ocupación, de disminuir la inflación y de estimular adecuadamente el incremento de los recursos materiales. Es menester, por tanto, una «nueva ecuación» político-económica, un nuevo proyecto capaz de eliminar el ahogo del motor de la «máquina capitalista» y de realimentar el consenso de las masas en torno a las instituciones liberal-democráticas. Es exactamente lo que los críticos (tanto de derecha como de izquierda) del modelo socialdemócrata son incapaces de señalar.

Desde el punto de vista del diagnóstico, entre las tesis de los neomarxistas y las de los neoliberales la distancia no es mucha. Fuera del coquetear de los primeros con la obsoleta (y metafísica) terminología dialéctica, sus conclusiones analíticas no son diferentes de las de los segundos. Cuando, por dar un ejemplo, James O'Connor dice que la crisis del Estado fiscal está minando las bases del consenso sobre el que se apoya el dominio burgués, no hace más que repetir lo que desde hace años los neoliberales vienen diciendo. Así, a primera vista, tanto los primeros como los segundos no hacen más que actualizar el pronóstico de Weber, Ortega, Mises, Hayek, Rizzi y Schumpeter, quienes entre las dos guerras mundiales vieron en la expansión de la jurisdicción potestativa del Estado la «prisión de acero» que ahogaría a la sociedad liberal. La diferencia sustancial entre los neomarxistas y los neoliberales es que los primeros contemplan el colapso del sistema capitalista como un hecho liberador. Convencidos como están de que después del capitalismo vendrá la «verdadera democracia», no se preocupan en lo más mínimo de indicar una terapia para eliminar los males que suponen las poliarquías industriales y ni siquiera de delinear un modelo de sociedad alternativo. El providencialismo histórico les da la absoluta certeza de tener en la mano la respuesta definitiva a todas las calamidades que afligen a la humanidad, aunque no se dignan a comunicarla a todos los mortales. Esto hace de ellos —digámoslo con toda franqueza— unos irresponsables.

Algunos de ellos, es cierto, proclaman que sólo el socialismo eliminará las contradicciones intolerables de la sociedad capitalista. Pero se guardan bien de decir qué se debe entender por socialismo, cuáles deberían ser las instituciones de la «nueva sociedad» y cuál su lógica sintáctica. Con todo, después de la trágica experiencia de los países donde el paradigma marxista-leninista —basado en el principio de la centralización absoluta— ha sido institucionalizado, la honestidad intelectual debería aconsejarles, por lo menos, una actitud menos arrogante. A estos hombres —que se comportan como si tuvieran el privilegio del cambio— se les debe refrescar la memoria, recordando que del gran combate ideológico entre Marx y Engels, por un lado, y Proudhon y Bakunin por el otro, fueron los segundos —desdichadamente— quienes salieron victoriosos a pesar de su derrota política. Es la propuesta anarquista la que se demostró científica, no la contenida en *El Capital*. Proudhon y Bakunin no han hecho otra cosa que prever aquello que el sentido común dejaba imaginar: que la concentración de los medios de producción en manos del Estado, presentada en el *Manifiesto* como el pasaje obligado para alcanzar el

reino de la libertad, habría llevado automáticamente el dominio incontrolable de una nueva clase explotadora: la «burocracia roja». En otras palabras, comprendieron que la revolución comunista no habría llevado efectivamente a la sociedad sin Estado sino, todo lo contrario, a una sociedad integralmente estatizada. Esto ha ocurrido puntualmente cada vez que los partidos marxistas han conquistado el Poder.

Menos reaccionaria, a la luz de la experiencia histórica, parece la solución neoliberal. Si efectivamente el aumento de la complejidad del sistema, las prácticas asistenciales y el dirigismo estatal están llevando a la hipertrofia burocrática, entonces la terapia correcta no puede ser el colectivismo sino la revitalización del mercado para liberar las energías espontáneas de la sociedad civil ahogadas por el exceso de Estado. El esquema analítico que los neoliberales utilizan es «Estado contra mercado», es decir, burocracia contra sociedad civil. Por esto podemos etiquetarlos como «el partido del mercado».

Nos encontramos frente a un partido que no oculta el tener propósitos de restauración capitalista para detener la invasión burocrática y la gravosa e irracional presión fiscal. La sociedad europea —argumentan sus teóricos— en el pasado se ha liberado de la tutela de los grandes cuerpos burocráticos (el Estado y la Iglesia) gracias a la expansión del mercado autorregulado y, por esto mismo, ha fundado la «cultura de la libertad». Pero ahora corre el riesgo de volver al control asfixiante de la megamáquina, en cuanto que el Estado asistencial está devorando en todos los campos los espacios de la acción electiva. En consecuencia, es imperativo detener el estatalismo omnívoro y devolver a la iniciativa privada aquel espacio que hoy ya no tiene. Sólo con esta condición será posible impedir el estrangulamiento progresivo de la racionalidad económica y de la libertad.

El primer vicio, analítico y terapéutico al mismo tiempo, del discurso neoliberal sobre la crisis de las poliarquías industriales, es que subestima un hecho de importancia decisiva: que si no se satisfacen las expectativas crecientes de la «ciudadanía», el déficit de racionalidad corre el riesgo de traducirse en déficit de legitimidad. Ya se habla, y quizá no sin razón, de la «ingobernabilidad de las sociedades opulentas». Si el Estado renunciase a desplegar sus funciones asistenciales y distributivas, se provocaría un verdadero amotinamiento de las categorías sociales «desposeídas» y, por consiguiente, la ruptura del pacto social que sostiene a los regímenes liberal-democráticos. La revalorización (teórica y práctica) de la economía, por la cual se pelean con tanto ardor los llamados «nuevos economistas», no es suficiente para revitalizar las sociedades occidentales, que necesitan no sólo más eficiencia sino también más participación. Y esto por una razón bastante simple: lo económico no puede fundar el orden social. Después de lo que han escrito Durkheim, Ortega y Parsons sobre la naturaleza no contractual de lo que sostiene y alimenta la vida social, no creo que se deba insistir mucho en este punto. El acuerdo *on fundamentals* (por usar una expresión eficaz de Harold Lasky) precede a las transacciones del mercado y las hace posibles.

A pesar de esto, los neoliberales creen poder demostrar la necesidad de dismantelar el Estado asistencial partiendo de la idea de que el orden social racional coincide con el sistema de mercado. Sobre este particular es típica la sutil cadena de razonamientos que Robert Nozick ha construido en *Anarchia, Stato, Utopia*. Después de haber puesto en la base de la sociedad un contrato de naturaleza casi comercial, Nozick llega a la conclusión de que «el Estado mínimo es el Estado más extenso que se pueda imaginar», y que «cualquier Estado más extenso viola los derechos de la gente». Consecuencia: ni «justicia redistributiva» ni «vínculos morales» de asistencia recíproca entre los habitantes del Estado —«La presión fiscal sobre los salarios está en el mismo plano que el trabajo forzado», sentencia Nozick—, sino sólo transacciones utilitarias reguladas por las leyes del mercado, sea por el interés egoísta de los actores sociales. Esta, para el hiperindividualista Nozick, es la «sociedad libre». De ahí el rechazo de la filosofía política de John

Rawls según el cual «las desigualdades sociales y económicas, por ejemplo, la desigualdad de riqueza y de autoridad, son justas sólo si se resuelven en beneficios que compensan a todos y en particular a los miembros de la sociedad menos aventajados. El Estado —siempre según Nozick— debe limitarse a hacer respetar las leyes que garantizan la libre iniciativa de los ciudadanos en todos los campos y no debe intervenir en absoluto para proteger a los débiles y para redistribuir, siguiendo un criterio de igualdad, las *chances de vida*». Evidentemente Nozick no conoce la observación, sólo aparentemente paradójica, de Tayllerand, según la cual la no intervención es un concepto difícil de definir ya que significa poco más o menos lo mismo que intervención.

Quizá menos radical, la filosofía política de los «nuevos economistas» al menos contiene una preciosa advertencia: la de no olvidar la dimensión económica de los problemas sociales. Y puesto que la economía coincide con las leyes objetivas del mercado, nos invitan a darles a éstas su justo espacio. Pero también el discurso de su propuesta es bastante poco convincente. Cuando Florin Aftalion nos dice que «la economía es la ciencia de las opciones», y que si queremos actuar racionalmente debemos utilizar sus instrumentos analíticos y operativos, no podemos dejar de escucharlo con aprobación; pero esto no legitima en absoluto la demanda del «Estado mínimo». Análogamente, cuando Henri Lepage denuncia «la incoherencia de las doctrinas marxistas, socialistas y *gauchistes* que luchan para liberar al hombre, pero al mismo tiempo confían esta liberación a la estructura más autoritaria y socialmente represiva: el Estado», lleva razón; más aún porque la crítica al estatismo y el rechazo del colectivismo tan defendido por los marxistas forma parte de la tradición socialista —basta pensar en Proudhon, Bakunin, Merlino, Cole, Rizzi—. Pero, además, no podemos evitar quedarnos perplejos cuando Lepage escribe tranquilamente que «la mejor garantía contra todas las explotaciones es el mercado». ¿También contra la explotación capitalista?

Evidentemente Lepage olvida que también en el mercado existen relaciones asimétricas de poder que hacen posible la explotación del hombre por el hombre. Si el mercado fuese la institución que Lepage imagina, sería una locura regularlo a través de la acción autoritaria del Estado. Pero no es así desde el momento en que quien posee los medios de producción —eso que Marx ha señalado repetidas veces— tiene el poder de controlar e instrumentalizar la vida de quien no los posee y que, justamente por esto, está obligado a vender su fuerza de trabajo al mejor postor.

El hecho es que los neoliberales, de la constatación de que la política asistencial ha generado una serie preocupante de «efectos perversos», extraen una conclusión contraria a toda la experiencia histórica acumulada por la humanidad occidental —y no sólo occidental— en los dos últimos siglos, que dice que el mercado, si es abandonado a su lógica específica de funcionamiento, penaliza despiadadamente a los *have nots*. Y tal conclusión no puede dejar de traducirse en un mensaje político conservador, más bien restaurador de los privilegios de las clases pudientes.

El significado clasista de la reacción neoliberal contra el Estado social se revela sin términos medios en las declaraciones de los líderes de la llamada «revolución azul». Cuando Morgens Glistrup declara que «el Estado debe volver a hacer la vigilancia nocturna»; cuando la señora Thatcher proclama con una franqueza ofensiva que «tenemos necesidad de nuevos millonarios»; cuando Will Durant escribe que «la libertad y la igualdad son enemigos declarados y eternos, y cuando una prevalece la otra muere»; cuando oímos todo esto no podemos dejar de darle la razón a Alain Finkelkraut, que ve en el *revival* neoliberal «una ruptura del pacto social», y a Paul Samuelson, que juzga al proyecto acariciado por Reagan como la negación del *New Deal* y de los valores democráticos que lo animaron. Parecen volver los tiempos —cronológicamente cercanos pero históri-

camente remotísimos— en que el presidente de los Estados Unidos, Hoover, sentenciaba que los desocupados robustecen la fibra moral de la nación.

Por otra parte, los hechos confirman los juicios negativos de la izquierda con respecto a la «revolución azul» y sus ideólogos. La política de los conservadores en Inglaterra, basada en la disminución de los impuestos sobre la renta y en el aumento de los impuestos indirectos, ha premiado visiblemente a las categorías sociales que gozan de mayores ingresos y penalizado a las menos pudientes. En síntesis, nos encontramos frente a una verdadera contrarreforma social —la definición es del moderado *The Economist*— que intenta derribar el Estado asistencial y restaurar el «capitalismo salvaje» basado en la competencia sin frenos morales de tipo casi darwiniano: los más fuertes se enriquecen y los más débiles «se las apañan». Parece increíble, pero evidentemente los partidarios del Estado mínimo creen poder revitalizar Occidente retornando al «¡Enriqueceos!» de Guizot.

Todo esto es inquietante. La función histórica que la civilización occidental se ha impuesto en este siglo ha sido la conciliación entre el valor-libertad y el valor-igualdad. Es, sin duda, una conciliación difícil, problemática, pero no imposible. Tal conciliación es el gran tema de nuestro tiempo si se quiere dar la base más amplia posible a la «cultura de la libertad». Y, en cambio, los ideólogos de la «revolución azul» teorizan explícitamente diciendo que la conciliación entre la libertad y la igualdad es imposible y que se debe renunciar, de una vez por todas, al «proyecto igualitario» y aceptar al capitalismo por lo que es: un sistema que no promete redistribución sino crecimiento económico (Irving Kristol). Así pues, lo que la cultura progresista —liberal y socialdemócrata— considera una de las mayores conquistas morales de la historia de la civilización —el Estado social— se presenta como un instrumento de tiranía o, al menos, como la antesala del «nuevo Leviatán», burocrático y totalitario.

De todos modos sería un error grave liquidar al neoliberalismo como una mera ideología de la restauración capitalista burguesa. La disminución del crecimiento económico, la excesiva expansión de la burocracia pública, los efectos perversos del asistencialismo indiscriminado, son fenómenos reales. Estos ponen a la orden del día el problema de modificar tanto la forma como los contenidos de la intervención estatal. Ya Myrdal, en 1958, escribía las siguientes palabras, de sabor casi tocquevilliano: «No creo que los ciudadanos de un Estado democrático plenamente desarrollado aceptaran convivir con un Gobierno asistencial meramente burocrático, hipercentralizado, manipulado por hábiles y poderosos operadores privados y por grupos de presión, como está destinado a convertirse si no es revitalizado por un efectivo control social de los ciudadanos». Y preconizaba una situación en la que «muchas medidas sociales podrían ejecutarse sin excesiva intervención directa del Estado y con una mínima regulación burocrática, simplemente activando, como forma de control, la presión de una opinión pública informada y la fuerza contractual de las organizaciones sociales».

Hoy la utopía de Myrdal, socialista y antiestatalista al mismo tiempo, resurge en las teorizaciones de Egor Matzner, de Giorgio Ruffolo, de Pierre Rosanvallon. Para estos y otros teóricos socialdemócratas el más allá del *Welfare State* se debe basar en dos negaciones —ni demasiado Estado ni demasiado individualismo— y en una afirmación: sí al «sector terciario», o sector cooperativo, que debería desarrollarse gracias a la plena y racional utilización de las tecnologías livianas. Y que su discurso es realista lo demuestra el hecho de que uno de los mayores estudiosos de las nuevas tecnologías, Norman Macrae, anuncia «la revolución de las microcomputadoras» que llevará a la extinción casi completa de los «dinosaurios» —las megaempresas—, y a la formación de un archipiélago de microempresas en el que será posible la reapropiación por parte de los productores direc-

tos de los instrumentos de producción. El mismo Lepage, finalmente, no ha dudado en pronosticar el tránsito de la actual sociedad industrial —semi-individualista y semi-burocrática— a la sociedad de «convivencia». En síntesis, «lo pequeño es bello» —por retomar el título del conocido libro de Schumacher— no parece, en el estado actual de nuestro conocimiento, una utopía irrealizable. Las microtecnologías hacen del advenimiento de la «sociedad de convivencia» una potencialidad inmanente a las sociedades industriales avanzadas.

Pero no es suficiente, para combatir la crisis actual, confiarse en la evolución espontánea de la tecnología. Es necesario desarrollar una estrategia global que haga funcionar mejor —de un modo más racional— al Estado asistencial, desburocratice la economía y acreciente los niveles de participación. Estas exigencias fueron expresadas magníficamente por Olof Palme: «Si nuestras sociedades altamente industrializadas quieren seguir avanzando, debemos conseguir mantener sus inversiones siempre a un nivel muy alto. Pero, ¿cómo obtener este resultado en una situación caracterizada por una gran presencia sindical, por tanto por la imposibilidad de imponer por la fuerza una política de salarios? A nuestro juicio es posible hacerlo a través del elemento positivo, convenciendo a los trabajadores a renunciar a una parte de sus aumentos salariales para que, en cambio, obtengan mayor participación en la propiedad de las empresas en que trabajan».

Es decir: si no podemos distribuir recursos materiales supletorios sin obstaculizar la máquina productiva, entonces —en vez de recurrir a la vía señalada por los ideólogos de la «revolución azul», o por esos incurables visionarios que son los marxistas— distribuyamos sustitutos idóneos, esto es, poder e información, potenciando más los órganos de control de los trabajadores sobre las decisiones del *management*; desarrollemos, en una palabra, la democracia en las empresas de forma que se transforme gradualmente la economía de mercado capitalista en una *economía participativa de mercado*.

Para conseguir tal fin, el Partido Socialdemócrata sueco ha aceptado, en la segunda mitad de los años setenta, el *Plan Meidner* como base programática a largo plazo. Tal Plan prevé, por lo pronto, la socialización gradual de los principales medios de producción a través de los propios «fondos de los trabajadores». Objetivo declarado: la autogestión de las empresas, vale decir, la extensión del principio democrático a las relaciones productivas.

Ciertamente, el proyecto de modificar el código económico de la civilización occidental presenta enormes dificultades tanto técnicas como políticas. Además no es seguro que el *Plan Meidner* resulte compatible con la lógica pluralista (que puede tener plena vigencia sólo si existe un sistema económico «policrático») desde el momento en que se podría transformar al sindicato en el gestor único de los medios de producción. De manera que la razón sugiere bajar la mira y apuntar a un objetivo más modesto. Después de todo, entre la pura economía privada de mercado y la economía participativa de mercado son concebibles numerosas formas de organización económica intermedias. Entre éstas merece una atención particular la delineada en el *Informe Bullock*.

El punto de partida del «modelo Bullock» es el rechazo a identificar la democracia industrial con la contratación colectiva entre el Capital y el Trabajo o, más precisamente, entre el *management* y el sindicato como sujeto monopolizador de la fuerza-trabajo. La nueva idea de democracia industrial que propone es la de un sistema de relaciones en el que los trabajadores, a través de sus representantes, participan en el proceso de decisión y por consiguiente cogestionan los medios de producción.

La fórmula propuesta —y bautizada  $2x + y$ — es particularmente ingeniosa. Con los dos «x» se indican el grupo de los representantes del Capital y el de los representantes del



Trabajo en los consejos de administración de las empresas; con la «y» un tercer grupo de personas escogidas de común acuerdo por los dos «x» entre categorías de competencia diversa (juristas, economistas, directores, sindicalistas, etc.). De este modo se garantiza la plena paridad entre los empleadores y los trabajadores sin por esto revolucionar el marco jurídico existente.

El hecho de que tal modelo de democracia en las relaciones industriales —que se puede llamar «cogestión paritaria»— se haya dejado de lado a causa de la escisión del *Labour Party*, no afecta su validez potencial. Sólo demuestra que tanto los conservadores ingleses como los laboristas han decidido refugiarse en sus respectivas tradiciones y rehúsan explotar vías nuevas para salir del túnel de la crisis.

Pero no se ve cómo el liberalismo y el estatalismo pueden parar la erosión del consenso sobre el que se apoyan hasta ahora las democracias de Occidente. Es necesario ir más allá del Estado asistencial, hacia una democracia descentralizada y participativa. Pero es precisamente ésto lo que el liberalismo y el estatalismo no pueden hacer: el primero, si tuviese éxito, conduciría a una auténtica regresión histórica; el segundo no puede más que intensificar los males que quiere curar.

Traducción: Diana Rosenfeld

---